



Magistrado Ponente: Dr. Efrain Rojas Segura

RESOLUCIÓN No. CSJHUR20-261
26 de octubre de 2020

“Por la cual se resuelve una solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa”

EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias conferidas en el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA11- 8716 de 2011 y según lo aprobado en sesión ordinaria del 15 de octubre de 2020, y

CONSIDERANDO

1. Antecedentes.
 - 1.1. El abogado Juan Sebastián López Ruíz, en calidad de Apoderado General de Medimás EPS S.A.S., solicitó vigilancia judicial administrativa al proceso ejecutivo con radicación No. 2019-0150, el cual cursa en el Juzgado 002 Civil del Circuito de Neiva, debido a la mala praxis del funcionario judicial, ya que ha decretado doble embargo sobre una misma pretensión, además, manifiesta que dicha medida es improcedente porque recae sobre recursos que recibe la EPS del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los cuales tienen una destinación específica y no son objeto de embargo.
 - 1.2. Igualmente, advierte que las actuaciones desplegadas por el juez dentro del proceso ejecutivo, no solo son contrarias a las disposiciones establecidas en la Circular No. 014 de 2018, expedida por la Contraloría General de la Republica, sino que también se encuentran contrarias a la Constitución Política y a la Ley.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

2. Precedente constitucional y normativo.

La vigilancia judicial administrativa es un mecanismo que busca garantizar que las decisiones de los jueces se produzcan oportunamente, bajo la observancia de los términos judiciales, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política. En desarrollo de este precepto, el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, señala:

“Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura tendrán las siguientes funciones:

(...) 6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama”.

Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Circular PSAC10-53 del 10 de diciembre de 2010, sobre el alcance de la vigilancia judicial administrativa, precisó:

“En este orden de ideas, al analizarse la competencia atribuida en el artículo 101 numeral 6 de la Ley 270 de 1996 a los Consejos Seccionales, es claro que apunta exclusivamente a que se adelante un control de términos, en aras de velar por una administración de justicia oportuna y eficaz, sin que de manera alguna se pueda utilizar este mecanismo para ejercer una indebida presión sobre los funcionarios judiciales, o para influir en el sentido de sus decisiones. No podrán por tanto los Consejos Seccionales - Salas Administrativas indicar o sugerir el sentido de las decisiones judiciales, la valoración probatoria, la interpretación o aplicación de la ley y en fin nada que restrinja su independencia en el ejercicio de la función judicial”.

Por su parte, el artículo 230 de la Constitución Política, consagra la autonomía de los jueces al dictar sus providencias, principio cardinal del Estado de Derecho, por lo que la disposición citada dispone:

“ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.

En ese sentido, el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, que reglamenta la vigilancia judicial administrativa, de manera expresa resalta el deber de respetar la independencia judicial, siguiendo así el mandato constitucional del artículo 228 de la Carta Política y la directriz establecida en el artículo 5° de la Ley 270 de 1996.

Es así como el artículo 14 del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, prevé:

“Artículo 14. Independencia y Autonomía Judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”.

De acuerdo con lo anterior, las decisiones que profieren los funcionarios judiciales, no pueden ser refutadas por ésta Corporación, puesto que la vigilancia judicial administrativa no puede ser utilizada para controvertir, sugerir o modificar las decisiones adoptadas por los jueces de la República, de tal manera que se restrinja su independencia en el ejercicio de la función judicial, toda vez que al hacerlo equivaldría a que esta figura se constituya en una instancia más que desnaturalizaría de plano toda la estructura de la función jurisdiccional.

3. Conclusión.

Teniendo en cuenta que en el presente caso, el abogado Juan Sebastián López Ruíz, solicitante de esta vigilancia refiere inconformidad frente a la decisión adoptada por el Juzgado 002 Civil del Circuito de Neiva, dentro del proceso ejecutivo con radicación No. 2019-0150, además, advierte que las decisiones adoptadas por el funcionario judicial, son contrarias a la Constitución Política y a la Ley, es de precisar que tales hechos no son competencia para esta Corporación, razón por la cual, se abstendrá de adelantar la solicitud de la vigilancia judicial administrativa, por no reunir los presupuestos que señala el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011.

Ahora bien, teniendo en cuenta los hechos advertidos, sería lo procedente remitir copias de las presentes diligencias al órgano competente, en este caso a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Huila, sino fuera porque en el mismo correo electrónico enviado por el abogado López Ruíz, a este Consejo Seccional, presenta en escrito separado queja disciplinaria en contra del citado funcionario, el cual ya fue remitido a esa Corporación, para lo de su competencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. ABSTENERSE de dar trámite a la solicitud de vigilancia judicial administrativa elevada por el abogado Juan Sebastián López Ruíz, en calidad de Apoderado General de Medimás EPS S.A.S., contra el Juzgado 002 Civil del Circuito de Neiva, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.


ARTÍCULO 2. NOTIFICAR la presente resolución al abogado Juan Sebastián López Ruíz, en su condición de solicitante y, a manera de comunicación remítase copia de la misma, al doctor Carlos Ortiz Vargas, Juez 002 Civil del Circuito de Neiva, como lo disponen los artículos 66 a 69 CPACA. Líbrense las comunicaciones del caso.

ARTÍCULO 3. Contra la presente decisión procede únicamente el recurso de reposición, por ser este trámite de única instancia a la luz de la Ley 270 de 1996 y del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, el cual de conformidad al artículo 74 del CPACA deberá interponerse ante esta Corporación dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 ibídem.

ARTÍCULO 4. Una vez se adelante el trámite correspondiente y en firme el presente acto administrativo, las diligencias pasaran al archivo definitivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Neiva, Huila.



EFRAIN ROJAS SEGURA
Presidente

ERS/DADP.